

ELEMENTOS PARA UNA TRANSICIÓN INTEGRAL EN VENEZUELA  
VISIÓN DESDE LO LOCAL

# Política de la Calle y Sociedad Civil 2019–2021

MARGARITA LÓPEZ MAYA

---

Actualización del capítulo del libro

Mayo 7, 2021

---

Este documento hace parte de la actualización de los distintos capítulos del libro *Elementos para una transición integral en Venezuela: Visión desde lo local*. Como miembros del Grupo Experto para Venezuela (GEV), creado por el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés), los autores hacen en sus capítulos análisis y propuestas pertinentes para contribuir a una salida negociada a la crisis venezolana y lograr una transición sostenible e incluyente.

## Introducción

Desde mediados de 2019, cuando se concluyó el estudio sobre *Elementos para una Transición Integral en Venezuela. Visión desde lo local* (IFIT, 2020), hasta hoy, primer cuatrimestre de 2021, relevantes desarrollos se han producido en la esfera de lo organizativo no estatal. Por una parte, la protesta ha continuado, aunque menos ligada a objetivos políticos. Por otra, organizaciones de la sociedad civil exhiben dinámicas de organización y articulación crecientes entre sí y con lo político, así como el despliegue de actividades en varios frentes, lo que les otorga mayor protagonismo que en el pasado. En esta esfera de la sociedad están surgiendo presiones sobre actores de gobierno y oposición política, y propuestas para superar la crisis, que producen una revisión de la agenda, estrategias y tácticas desarrolladas por los partidos en años anteriores.

En la primera parte de este informe resumimos los principales desarrollos de la política de la calle entre 2019 y 2020. En la segunda, ofrecemos información sobre la evolución reciente de un grupo de actores de la sociedad civil con dinámicas que se centran en coordinarse para buscar soluciones negociadas a la crisis. En la tercera parte, reflexionamos sobre los impactos de las sanciones y las necesidades de la sociedad civil. Y en la cuarta en los roles que pueden y debieran jugar en la transición<sup>1</sup>.

1. Mi agradecimiento a diversos activistas de organizaciones de la sociedad civil que me regalaron un poco de su tiempo para responder mis consultas o revisar textos. En particular a Keta Stephany, Ricardo Cusanno, Deborah Van Berkel, Carlos Correa, y Mariela Ramírez.

## 1. Protesta de calle sin expresión política

Las manifestaciones disímiles protagonizadas por multitudes en la calle vivieron un año pico en 2019 cuando el Observatorio Venezolano del Conflicto Social (OVCS) registró un récord de 16.739 manifestaciones en todo el país (OVCS, 2020). La cifra superó la de los ciclos de protesta previos de 2014 y 2017, reseñadas en nuestro informe anterior, así como las protestas de 2018. Equivalió a un promedio de casi 46 protestas diarias, lo que da cuenta de la turbulencia sociopolítica que sigue marcando la vida cotidiana en Venezuela.

También destaca ese año el alto número de protestas políticamente motivadas, que constituyeron el 42% de todas las motivaciones, un promedio muy superior a protestas con motivaciones económicas, sociales, culturales y de otros DDHH. El porcentaje revela las expectativas de la ciudadanía de producir con su esfuerzo un cambio político, ocurriendo ese año una conexión importante entre las esferas política y social. Las decisiones tomadas por los partidos principales en la Asamblea Nacional (AN), única rama del poder público donde aún existía pluralismo político e independencia del Ejecutivo Nacional, habían logrado darle expresión política a la multiplicidad de agravios y demandas insatisfechas de la población. El 23 de enero de 2019, en una multitudinaria manifestación de calle, el diputado Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular, nombrado ese año presidente de la AN, apoyándose en la constitución se proclamó presidente interino de Venezuela. Anunció una agenda que giró en torno a tres objetivos secuenciales: a) cese de la usurpación; b) gobierno de transición; c) elecciones libres y transparentes. Ese año, multitudes y organizaciones salieron al llamado, apoyando esa agenda. La respuesta del gobierno fue escalar la represión.

La situación cambió en 2020, cuando a mediados de marzo se informó oficialmente de la llegada de la pandemia y el gobierno impuso durante varios meses cuarentena estricta, acompañada de una creciente militarización de los espacios urbanos (López Maya, 2020). Las protestas, debilitadas ya por la dura represión, disminuyeron a un total de 9.633, es decir, un promedio de 26 protestas diarias, cifra todavía muy significativa, si se considera que más del 80% ocurrieron en el período de cuarentena y que es una de las cinco cifras más altas de la década (OVCS, 2021). Las características, sin embargo, cambiaron mucho con relación al año anterior. El 85% de ellas fueron motivadas por demandas de naturaleza económica y social, y sólo el 14% por razones políticas. Este promedio, que sigue siendo relativamente alto, revela que la conexión entre lo político y lo social persistía, pero tendía a debilitarse.

Son varios los factores que explican esta disminución. Uno, la fuerte represión. Se ha convertido en patrón reprimir a la ciudadanía con acciones conjuntas entre comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos civiles arma-

dos –paramilitares–. El ovcs registró en 2019 un saldo de 67 personas fallecidas en el marco de estas protestas<sup>2</sup>. En el año 2020, en contraste, el saldo fue de 6 fallecidos (ovcs, 2021), lo que parece señalar que el gobierno usa menos violencia contra protestas de sectores pobres motivadas por necesidades económicas y sociales. Otro factor es la severa persecución a dirigentes y partidos políticos: en 2019 el Foro Penal Venezolano registró más de 2.200 detenciones arbitrarias por razones políticas (2020). En mayo, en medio del ciclo de protestas, la cifra de presos políticos alcanzó los 859, persistiendo para fines de año más de 380 presos políticos<sup>3</sup>. Diez diputados fueron acusados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes, por haber respaldado al presidente interino. Haciendo uso de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC), presidida por Diosdado Cabello, el gobierno procedió a allanarles la inmunidad parlamentaria. A fines de año eran más de veinte los diputados a quienes se les despojó de su inmunidad parlamentaria<sup>4</sup>.

En 2020 la gente fue retirándose de las protestas políticas y centrándose en las preocupaciones de su sobrevivencia. Siguió las protestas puntuales, pero sin conexión con la política. Encuestas de opinión, registraron a fines de año desencanto y frustración hacia la política (Delphos, 2020). Adicionalmente, los partidos opositores acordaron no concurrir a las elecciones parlamentarias pautadas constitucionalmente, aduciendo la inexistencia de condiciones integrales mínimas para garantizar su carácter democrático. Esta decisión contribuyó también con la continuación de la tendencia a desmovilizarse políticamente.

No obstante, las protestas por motivos económicos y sociales continuaron, en números e intensidad significativos, si se consideran el contexto de dictadura y pandemia. Se han extendido a todas las regiones del país y a todos los sectores sociales, incluyendo entidades federales que hasta hace poco eran bastiones chavistas y poblaciones rurales e indígenas (ovcs, 2019).

En el mes de septiembre de 2020, por ejemplo, durante cuatro días consecutivos hubo movilizaciones intensas en el estado Yaracuy, una de las entidades federales más rurales y chavistas del país<sup>5</sup>. La protesta comenzó en la localidad de Bruzual, extendiéndose a Peña, Aroa, Cocorote, Independencia y Yaritagua.

2. El Informe de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH ese año confirma el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones y documenta 66 de las muertes (OACDH, 2019).

3. <https://eldiario.com/2019/12/25/2019-el-ano-con-mayor-cantidad-de-presos-politicos-en-venezuela/> consultado el 20-03-2021.

4. En septiembre de 2020 la Comisión Internacional de Determinación de los Hechos nombrada por el Consejo de DDHH de la ONU entregó un informe sobre las violaciones de DDHH por parte del gobierno de Maduro. Señaló que son de tal gravedad y escala que algunas califican como crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2021, en la actualización oral de dicho Informe, la presidenta de la misión ratificó lo allí expuesto y denunció la continuación de violaciones como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, violencia sexual y de género (Valiñas, 2021). También pueden verse las actualizaciones orales de la OACDH.

5. Información tomada de <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/09/26/tension-en-venezuela-las-fuerzas-del-regimen-reprimen-el-cuarto-dia-de-protestas-en-yaracuy/> consultado el 24-03.

En Nirgua y Sabana de Parra la gente reclamaba por los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico. Según Provea, la represión gubernamental fue desproporcionada, denunciando los vecinos la presencia de grupos paramilitares que junto a la fuerza pública los atacaban. Gases lacrimógenos, balas de goma, la búsqueda de los manifestantes casa por casa sin respetar ninguna garantía jurídica fue el patrón utilizado, el cual de modo creciente viene caracterizando la represión de la dictadura.

## 2. Una sociedad civil activada

De acuerdo con un estudio levantado por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) para 2019, en Venezuela hacían vida asociativa no estatal un aproximado de novecientas cincuenta organizaciones en todo el territorio nacional. Dos años después este número sigue estable, aunque se han producido cambios en sus membresías, particularmente en las ONG que han visto a activistas irse del país, aunque nuevos se han incorporado (LACSO, 2019, Briceño León, 2021). Se ha detectado como fenómeno nuevo la aparición de ONG formadas con miembros del oficialismo, posiblemente para capturar recursos que la dictadura ya no les otorga. Otras organizaciones, que previamente tuvieron distintos enfoques, se han trasladado al campo de la ayuda humanitaria, posiblemente incentivados por las condiciones actuales de financiación internacional favorables a estas organizaciones y la urgencia de esta ayuda que tiene la población (Briceño León, 2021).

El contexto para la sociedad civil se ha endurecido. Ya lo habíamos constatado en el informe anterior, pero en estos últimos años, particularmente las ONG dedicadas a la defensa de DDHH y ayuda humanitaria, han visto arriesgar las amenazas y la represión contra ellas y sus activistas. A Miconvive, una ONG que se ocupa de la violencia en los barrios y a Caracas Alimenta la Solidaridad, que provee de alimentación a cerca de 25.000 niños en la ciudad de Caracas, les fueron allanados a fines de 2020 sus sedes y la casa de su director, así como congeladas las cuentas bancarias. En enero de 2021 le tocó a *Amigos Zulianos en Positivo –Azul Positivo–* cuando detuvieron a cinco de sus miembros y los pasaron a tribunales militares. Azul Positivo trabaja con la ONU, manejando recursos de ayuda humanitaria en el estado Zulia, un hecho que el gobierno de Maduro no tolera pues considera que sólo él ha de controlar el reparto de ayuda a familias necesitadas. La presión internacional permitió la liberación de estos activistas, pero se mantienen los juicios contra ellos por supuestos cargos de corrupción<sup>6</sup>. Vale señalar, que de faltar los apoyos internacionales a estas ONG se afectarán severamente la sostenibilidad de ellas, así como la muy vulnerable situación de los sectores de la población a las cuales asisten.

Diosdado Cabello, presidente de la ANC disuelta a inicios de 2021, les advirtió públicamente a fines de 2020, que se revisaría pronto la normativa que les autoriza a recibir financiamiento internacional. Incluso tildó directamente a la ONG de DDHH Provea de “organización terrorista”<sup>7</sup>. Esto se concretó en abril de 2021 con la Providencia Administrativa No. 001-2021, una norma sub-legal que tiene como

6. Los cargos fueron: “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”. En: <https://www.dw.com/es/onu-le-pide-a-venezuela-la-liberaci%C3%B3n-de-miembros-de-la-ong-humanitaria-azul-positivo/a-56388933> descargado el 02-04-2021.

7. <https://www.youtube.com/watch?v=bQMFo6pu-YQ> descargado el 02-04-2021.

objetivo establecer un registro unificado obligatorio de sujetos ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. La Providencia considera a estas organizaciones potencialmente terroristas y se las obliga a informar sobre el origen de sus fondos y los nombres de sus beneficiarios<sup>8</sup>. La Providencia ha sido rechazada por más de 700 organizaciones dentro y fuera del país<sup>9</sup>.

Pese al hostigamiento, las organizaciones continúan trabajando, observándose tendencias a actuar conjuntamente en la asistencia de asuntos como la ayuda humanitaria, la Covid-19, la protección y el monitoreo de derechos humanos, y el desarrollo comunitario. Hay casos donde también trabajan con actores políticos opositores como señalaremos abajo. Así, se han hecho más visibles y han abierto espacios de encuentro entre ellas para apoyarse en las denuncias ante instancias nacionales e internacionales, para difundir comunicados sobre diversas materias de violación de DDHH, y para acciones conjuntas. Ese proceso está llevando a la aparición de espacios regulares de encuentro y plataformas formales de coordinación en torno a objetivos y estrategias comunes.

El mayor protagonismo de organizaciones de la sociedad civil, algunas incluso politizándose, está relacionado con la crisis de representación política que padecen los partidos democráticos, ahondada en 2020 con el control obtenido por el gobierno del Poder Legislativo en diciembre. Es este vacío lo que visibiliza e impulsa a la sociedad a organizarse desde abajo. En las plataformas y espacios de articulación emergentes vemos actores civiles respaldándose mutuamente, elaborando comunicados conjuntos que expresan sus posiciones sobre distintos eventos del quehacer sociopolítico. Desde estos espacios y mecanismos se diseñan estrategias de acción y/o se construyen propuestas de salida a la crisis venezolana. En lo que sigue se resaltan las de mayor visibilidad.

## 2.1 El sector empresarial organizado

Este actor no fue objeto de análisis en el informe previo. Sin embargo, dada la situación catastrófica de la actividad productiva del país, se ha vuelto más activo. Los empresarios del país vienen tejiendo vínculos entre ellos desde al menos 2018, con la finalidad de apoyarse mutuamente para manejar el entorno hostil al sector privado que prevalece en las políticas económicas gubernamentales. Existen actualmente redes y lazos entre empresarios particulares y asociaciones empresariales. Está Conapri<sup>10</sup>, con algunos sectores individualmente, el sector bancario, Cavidea<sup>11</sup>, el sector inmobiliario y Fedecámaras como actor nacional y sectorial comunicándose entre sí. Igualmente, algunos tienen comunicación con

8. <https://cepaz.org/articulos/providencia-administrativa-no-001-2021-un-nuevo-cerco-al-espacio-civico/>, descargado el 24-04-2021.

9. <https://www.correodelcaroni.com/pais-politico/mas-de-700-organizaciones-exigen-derogar-nueva-providencia-que-precalifica-a-ong-como-terroristas/>, descargado el 24-04-2021.

10. Consejo Nacional de Promoción de Inversiones.

11. Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos.

el gobierno al más alto nivel, es decir, con el propio Nicolás Maduro, miembros de su gabinete y con la AN oficialista en ejercicio desde 2021<sup>12</sup>.

En 2020 se vio a Fedecámaras desarrollar actividades públicas para debatir la situación de los distintos sectores económicos, así como para elaborar propuestas capaces de superar la postración de la actividad productiva. Han creado alianzas con la CAF<sup>13</sup> para asesorías y apoyos financieros. También han hecho contactos con Cecosesola<sup>14</sup>, Grupo Cesap y Sinergia, organizaciones de desarrollo comunitario, y forman parte del llamado Diálogo Social y del Foro Cívico, que revisaremos abajo. Entre las recientes actividades de Fedecámaras destacan la LXXVII Asamblea Anual de Fedecámaras, celebrada en agosto de 2020, donde incorporaron invitados especiales de la CAF y de CEPAL para discutir modelos de desarrollo para Venezuela. También invitaron al director de la ONG, *Institute for Integrated Transitions* (IFIT), que disertó sobre experiencias de salidas negociadas en países conflictuados, y las posibilidades de una estrategia análoga para el país<sup>15</sup>. Otro invitado fue el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para conocer el proceso de paz de dicho país y el rol que jugó el empresariado. Ese año realizaron también un ciclo de foros virtuales para todo público sobre *Economía y Libre Empresa* que produjo una publicación con algunas de las ponencias (Fedecámaras, 2020a). Así mismo, organizaron un ciclo de talleres llamado “Camino de Negociación. Lecciones Aprendidas”. Allí, con información directa de actores involucrados, profundizaron en las experiencias de negociación colombiana, del Cuarteto de Túnez y el Acuerdo del Viernes Santo de Irlanda del Norte.

Las cámaras de industria y comercio de Fedecámaras han venido reclamando jugar un papel más activo en los procesos de cambio, en el área de experticia que los ocupa<sup>16</sup>. Demandan ser parte de futuros procesos de negociación con el gobierno, y consideran que empresarios y políticos que continúan trabajando en el país, deben ser objeto de apoyo y consulta en las acciones que sobre Venezuela toman los partidos y actores de la comunidad internacional, particularmente EEUU. Perciben que la economía viene transformándose caóticamente, y que los dirigentes políticos se muestran incapaces de evaluar bien esos cambios. Les reclaman también no haber apoyado sus demandas, ni haber tomado en cuenta sus intereses en las agendas elaboradas en los procesos de negociación previos. Estos empresarios se sienten afectados por las sanciones que países como EEUU han impuesto a la economía venezolana y piden que el sector privado sea separado de las mismas, diferenciándolo del gobierno. En los resultados de una consulta realizada en febrero de 2021 por la encuestadora *Datincorp*, a 1.116 empresarios de distintos sectores y rangos, y pertenecientes a diversos gremios empresariales, se encontró que, pese a las adversidades, hay la disposición de seguir tratando

12. Estas afirmaciones se basan en distintas declaraciones dadas por empresarios de estas organizaciones en eventos desarrollados entre 2020 y 2021. Notas mías.

13. CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

14. Central de Cooperativas de Servicios Sociales de Lara.

15. <https://noticiasvenezuela.net/2020/08/05/ricardo-cusanno-debates-de-la-lxxvii-asamblea-anual-de-fedecamaras-deben-abrir-vias-para-un-mejor-pais-5ago/>

16. Las demandas que a continuación se señalan han sido recogidas por mí en diversos eventos de este actor a lo largo de 2020 y 2021.

de producir. El sector privado, según estos encuestados, desconfía del gobierno y exige absoluta paz social y política, así como un nuevo marco jurídico para invertir (Datincorp, 2021).

Otra actividad donde participó Fedecámaras con diversas organizaciones civiles fue el I Foro Cívico Multiactores de diciembre 2020. Ese foro tuvo como objetivo diseñar la ruta a seguir por parte de grupos de la sociedad civil para 2021. Allí el presidente de la federación señaló como meta de los empresarios abrir espacios de diálogo y creación de consensos. Enfatizó la profunda vocación democrática de Fedecámaras y aseguró que sus acciones no son para desplazar a otros actores sino para que “todos hagamos lo que tenemos que hacer” (Fedecámaras, 2020b).

En marzo de 2021 Fedecámaras lanzó públicamente el ofrecimiento de un plan privado de vacunación contra la Covid-19, totalmente gratuito para los beneficiarios y donde todos los actores dentro de la cadena de valor del proyecto trabajarían a costo, es decir, sin interés de tipo comercial. Su meta inicial comprendería la compra de 6 millones de vacunas, 80% de los cuales estarían destinadas a personas vinculadas a este sector de la economía y sus familiares, y 20% serían donados a grupos vulnerables. El presidente de Fedecámaras explicitó que habían presentado el plan en la Mesa de Diálogo y Paz de la nueva AN, de mayoría oficialista, y explicó que se han apoyado para su elaboración y concreción en gremios profesionales de la salud, clínicas privadas y espacios del sector público. Están a la espera de la aprobación de la permisología para hacer la compra. Afirmó que en esta época de crisis el sector privado debe “coadyuvar al Estado” (Cusanno en La Fuerza es la Unión, 26-03-2021)<sup>17</sup>. La propuesta espera para su aceptación por parte del gobierno.

## 2.2 El Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL)

Señalamos en el informe anterior un incipiente esfuerzo de organizaciones políticas y sociales por crear conexiones entre ellas. Identificamos al FAVL, nacido en marzo de 2018, gracias al esfuerzo de partidos políticos opositores, incluidos algunos desprendidos del chavismo, gremios profesionales, academias, universidades, sindicatos, personalidades y jerarcas de la iglesia católica. Esta plataforma despertó expectativas. Tenía varios desafíos de corto plazo, como crear estructuras y procedimientos formales capaces de darle transparencia y confianza a las relaciones entre estos disímiles actores, dilucidar cómo elegiría su liderazgo, y construir una narrativa que la posicionara en la dinámica del juego político.

Tres años después, el FAVL permanece sin respuestas satisfactorias a estos desafíos. En razón de ello, si bien continúa, sectores sociales organizados se han distanciado y han emergido otras articulaciones con propósitos similares, ofreciendo otras concepciones de cómo debe darse esa relación.

Al día de hoy, el FAVL sigue trabajando como un canal de comunicación entre el llamado G4, o Grupo de los 4 – los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Voluntad Popular y organizaciones de la sociedad civil (Picón,

17. <https://www.youtube.com/watch?v=KuMrokSchAk> descargado en 26-03-2021.

2021). El psicólogo Ángel Oropeza, quien ha funcionado como coordinador político del FAVL, según sus declaraciones en prensa y reuniones, lo caracteriza como una plataforma donde estos dos tipos de actores colaboran en objetivos comunes<sup>18</sup>. Un ejemplo de ello es como han trabajado partidos y ONG para conseguir ayuda humanitaria y acceso al Sistema COVAX de la ONU. Sin embargo, no parece haber suficiente disposición de los partidos a compartir con la sociedad civil la deliberación horizontal y compartida de objetivos y estrategias políticas, de negociación con el gobierno o relativo a la lucha democratizadora. Esto produce tensiones y desconfianzas con Fedecámaras, organizaciones sindicales, gremios y otras organizaciones cívicas y desactiva la política de la calle.

El FAVL acompañó, aunque las organizaciones sociales no fueron consultadas, la estrategia de los partidos de designar al diputado Juan Guaidó, electo presidente de la Asamblea Nacional (AN) en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela. Fue el FAVL con la AN, el que convocó a las marchas y distintas actividades de calle en 2019 en apoyo a Guaidó, así como apuntaló la estrategia de los tres ejes, que señalamos arriba. En 2020, avaló así mismo, sin haber sido consultadas previamente las organizaciones, las decisiones del G4 de no participar en las elecciones parlamentarias de diciembre, desconocer los resultados de éstas, convocar a una consulta popular y aprobar un estatuto de transición. Gracias a los reclamos hechos, los partidos se avinieron a una consulta *a posteriori* de estas decisiones y las organizaciones del FAVL se encargaron de la consulta popular. En el estatuto de transición aprobado por la AN saliente, se estableció la designación de una Comisión Delegada –un órgano que funciona acorde con la constitución durante recesos legislativos– para que continuase la labor legislativa más allá de terminado el período legislativo constitucional. Esta estrategia, también ha contado con el respaldo de las organizaciones civiles del FAVL, permitiendo argumentar la legitimidad de Guaidó como presidente interino y la figura del gobierno interino, más allá del cierre del período legislativo que les correspondía. Pero, estos procedimientos han acarreado tensiones y distanciamientos entre actores sociales y políticos.

Ya en 2018, las opiniones de los sindicatos que se agregaban en la Unidad de Acción Sindical y Gremial (UASG), y tenían dos voceros en el FAVL, estaban divididas en torno a una propuesta procedente del partido La Causa R (LCR) de convocar ese año a una huelga general de trabajadores “en defensa de las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos y el restablecimiento de los derechos constitucionales”<sup>19</sup>. Los opuestos a la huelga argumentaron que un evento de esa magnitud no se improvisa, y que requería tiempo, acciones previas y esfuerzos de organización

18. <https://elestimulo.com/angel-oropeza-el-frente-amplio-es-una-plataforma-comun-para-la-salida-de-la-crisis/> descargado el 13-04-2019.

19 La Unidad de Acción Sindical y Gremial (UASG) articulaba las centrales sindicales CTV, UNETE, CGT y Codesa, así como corrientes sindicales como FADESS, MOSBASE y C-CURA. También estaban ahí federaciones de profesionales como FAPUV y el Sindicato de la Prensa (ver más detalles de esto abajo). Nombraron dos voceros en el FAVL, pero como nunca se hizo un esfuerzo por darle al sector trabajador organizado una articulación formal en el FAVL se fueron distanciando en 2019 (Stephany, 2019). Ver también <http://contrapunto.com/noticia/frente-amplio-crea-comite-de-conflicto-para-organizar-huelga-nacional-216487/> descargado el 14-01-2019.

para tener éxito. También consideraban que las organizaciones sindicales de base no iban a postergar sus luchas por salarios y derechos laborales esperando que primero se concentraran las estrategias en la salida de Maduro (Stephany, 2021). Dadas estas diferencias se estableció en el FAVL un Comité del Conflicto, pero las reuniones entre las distintas posiciones se fueron distanciando y meses después, la UASG creó la *Intersectorial de los Trabajadores*, una alianza sindical y gremial expresamente independiente de pautas de los partidos y centrada en luchas por salarios dignos, derechos laborales y libertad sindical: “Aquí no representamos partidos, no representamos grupos, aquí lo que representamos es a los trabajadores, representamos a los trabajadores”<sup>20</sup>.

Otra discrepancia estuvo vinculada a la estrategia de “todas las opciones están sobre la mesa”, que varios actores sociales no compartieron, pero no se les escuchó (Picón, 2021). Como producto de la decisión de no concurrir a las elecciones parlamentarias de 2020, Médicos Unidos de Venezuela también se distanció del Frente. Consideró que tal estrategia estaba reñida con sus objetivos de defensa de los DDHH, en particular, del derecho a la participación (Lorenzo, 2021).

En 2021, con la finalización sin éxito de la estrategia política de los tres ejes secuenciales, y la consiguiente fragmentación y debilitamiento de los partidos que lo impulsaron, dirigentes del G4 reconocieron la necesidad de una revisión profunda de esta plataforma y se anunció el relanzamiento de una “nueva alianza para las elecciones libres”. Fue el embajador de EEUU para Venezuela, residenciado en Bogotá, quien hizo las primeras declaraciones públicas sobre esta materia. La nueva alianza sustituiría al FAVL y contaría con el apoyo de EEUU (en Perspectivas, 26-03-2021)<sup>21</sup>. El mero hecho de que haya sido el embajador de EEUU para Venezuela el primero en anunciar la estrategia suscitó cuestionamientos entre organizaciones de la sociedad civil (Lorenzo, 2021). Un documento de acuerdos entre los partidos políticos fue publicado el 11 de abril, recibiendo unos días después el apoyo del FAVL, que se puso a la disposición para que “a través de la red de frentes amplios regionales (estadales y municipales) los partidos políticos puedan difundir y compartir con sectores sociales miembros y no del FAVL, su visión estratégica”<sup>22</sup>.

### 2.3 Articulaciones del sector trabajador

Señalamos en el informe previo la tendencia general de las organizaciones laborales –sindicatos y sus federaciones y confederaciones– a tener históricamente una relación de dependencia y cooptación con los partidos. El paralelismo sindical fue, así mismo, una práctica extendida en la etapa democrática y profundizada durante el chavismo. Estos rasgos, junto a la fuerte represión y estigmatización de sindicatos y dirigentes hecha por la llamada “revolución” chavista, junto a

20. Rubén González en <https://www.aporrea.org/trabajadores/n334313.html>, descargado el 14-03-2019.

21 <https://youtu.be/6ztSNYNWJ68> descargado el 26-03-2021.

22. <https://presidenciave.com/regiones/frente-amplio-venezuela-libre-saluda-acuerdo-de-los-partidos-politicos-democraticos/> descargado el 24-04-2021.

la suspensión de sus procesos de elección desde hace más de veinte años por decisiones irregulares del TSJ, las mantienen divididas, dispersas y debilitadas. Su capacidad para canalizar las demandas socioeconómicas y políticas de sus representados y/o incidir en la creación de condiciones para presionar al poder para entrar a una transición negociada es escasa.

No obstante, la extinción en la práctica de los derechos humanos de la población, particularmente en lo que atañe a los derechos de los trabajadores, han sido incentivos permanentes para tratar de tejer alianzas, uniones y distintas plataformas para acumular fuerza. No sólo entre sindicatos y centrales obreras, sino también de estos con gremios y colegios profesionales. Estas articulaciones, que se vienen dando desde hace ya varios años, tuvieron inicialmente metas reivindicativas, pero se han desplazado hacia la lucha por DDHH básicos, como el derecho al trabajo, salario digno, la libertad sindical y la democratización institucional. Pese a ello, no logran superar la fragmentación y suelen tener una vida efímera. Veamos de manera breve algunos ejemplos.

**2.3.a.** La Intersectorial de los Trabajadores de Venezuela (ITV). Chávez y su coalición política disputaron desde 1999 –cuando llegaron al poder– la hegemonía sindical al partido Acción Democrática (AD), que controlaba la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) (Iranzo, 2018). Al no lograr ganar elecciones en la CTV, en 2003 impulsaron la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT), llevándose un número importante de los sindicatos de base de la CTV a esta nueva central. En los años siguientes la UNT respaldaría numerosas iniciativas del Ministerio del Trabajo, como las innovaciones cogestionarias, las expropiaciones de empresas y también el paralelismo sindical (Ídem).

El proyecto del socialismo del siglo XXI del segundo gobierno de Chávez (2007–2013), al no contemplar en el futuro la autonomía sindical, ni reconocer conquistas como los contratos colectivos, produjeron quiebres entre el gobierno y la UNT, y al interior de la nueva central. Hacia 2009, un grupo de sindicatos tomó la iniciativa de crear una nueva alianza que denominó Movimiento de Solidaridad Laboral (MSL), que buscó convertirse en un referente clasista, autónomo, democrático y plural dentro del movimiento sindical, independientemente de sus inclinaciones políticas (Iranzo, 2018). Y en 2011, al ser ignorada la UNT por el gobierno en la discusión de una nueva Ley del Trabajo, esta se dividió. La parte dispuesta a subordinarse a las directrices oficialistas constituyó la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela (CBV), mientras la UNT adversa a ello pasaría a incorporarse a alianzas sindicales opositoras al gobierno. Hoy existen en el país al menos unas cinco centrales sindicales, que dicen representar a los trabajadores. El gobierno sólo reconoce a ASI –Central de Trabajadores (as) Alianza Sindical Independiente– constituida legalmente en 2020 y a la oficialista CBV.

Varias fueron las iniciativas de articulación con gremios previas a la ITV. Entre las primeras estuvo el Bloque Gremial de 2008, una alianza entre la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) y otras organizaciones de colegios profesionales, entre ellos las del sector Salud (Stephany, 2021). En 2010 otra iniciativa se concretó en el Frente Amplio en Defensa del Empleo y los Sindi-

catos (FADESS), juntándose en él gremios y sindicatos, entre los cuales estaban federaciones de la CTV, asociaciones del sector Salud, y organizaciones sindicales del sector privado, como las de empresas Polar.

Más tarde se ensayó la Unidad de Acción Sindical y Gremial (UASG) (Iranzo, 2018). Allí convivieron centrales, gremios y federaciones independientes: UNT, CTV, CGT<sup>23</sup>, CODESA<sup>24</sup>, FAPUV, SNTP<sup>25</sup>, FENAJUPV<sup>26</sup>, COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA, APUCV, FLEC, FADESS, ASI, MOSBASE, CCURA<sup>27</sup>. La UASG ha sido bastante activa. introdujo en la AN en 2016 una ley de Libertad Sindical, que dicha instancia nunca discutió. En 2017 se pronunció en rechazo a las sentencias inconstitucionales del TSJ, que levantaron la inmunidad parlamentaria de los diputados y confiscaron las facultades del Legislativo<sup>28</sup>. También ha tomado iniciativas en el exterior como acudir con un documento que sustancia la violación de derechos laborales por parte del gobierno en la OIT (Stephany, 2021). En marzo de 2021, la OIT ha emitido un fallo que indica que el gobierno de Nicolás Maduro ha violado convenios internacionales y derechos fundamentales de los trabajadores. La dictadura ha rechazado tal decisión tildándola de darse en un ambiente “hostil y mezquino”<sup>29</sup>.

La ITV nació en 2018, y es la última iniciativa impulsada por centrales, corrientes sindicales y colegios profesionales que estaban articuladas en la UASG, juntándose a ella organizaciones de trabajadores que hasta entonces estaban dispersas o en Marea Socialista<sup>30</sup>. Es un esfuerzo por articular al sector trabajador desde abajo, desde la base, que reconocieron no lograban impulsar desde las directivas de las centrales. Ya para esta fecha, el gobierno de Maduro había terminado con la contratación colectiva e impuesto unas tablas salariales que aplanaron las interescalas y cambiaron las fórmulas de cálculo de otros beneficios de los trabajadores, lo que creó un terreno propicio para la incorporación de otros sectores a la protesta. La ITV ha buscado darle viabilidad a la acción de calle, articulando desde los sindicatos y las federaciones la movilización, en vista que los directivos de las centrales no parecen tener capacidad de convocatoria (Stephany, 2021).

**2.3.b.** Intergremial Sindical del sector Salud. Los gremios y sindicatos del sector Salud, merecen mención especial. En 2018 se produjo la huelga de las enfermeras, que comenzó en dos de los hospitales públicos más importantes del país, y se extendió a más de veinticinco de estos centros, incorporándose también otros

23. Confederación General de Trabajadores de Venezuela.

24. Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela.

25. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa

26. Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela.

27. Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Antiimperialista (troskista).

28. <https://www.fecobiove.org/comunicados/2017/declaracion-unidad-accion-sindical-gremial.asp#:~:text=Es%20el%20pacto%20social%20que,de%20justicia%20y%20de%20derecho.>

29. <https://www.eluniversal.com/politica/93765/venezuela-no-reconocera-el-fallo-de-la-oit-en-su-contr> descargado el 12-04.2021.

30. Marea Socialista es un movimiento chavista no madurista, que no avala acuerdos con la oposición principal. Se consideran chavismo “crítico”. Ver <https://www.aporrea.org/actualidad/n312918.html> descargado el 12-04-2021.

gremios del sector<sup>31</sup>. La huelga duró dos meses e impulsó una tendencia a articularse, que ha servido de acicate desde entonces a otros esfuerzos articuladores como el de la ITV caracterizada arriba. Las organizaciones del sector salud han sido más constantes y efectivas en sus procesos de articulación entre sí y con otras asociaciones de trabajadores y gremios, posiblemente porque han permanecido más en sus sitios de trabajo, facilitándose la convocatoria a asambleas y otras actividades colectivas. En 2018 avanzaron creando la Intergremial Sindical de Salud, donde participaban los gremios profesionales del sector con las organizaciones de trabajadores Fetrasalud y la Sunep-SAS<sup>32</sup>.

## 2.4 Dale Letra, Diálogo Social y el Foro Cívico

Señalamos en el informe anterior que, al cierre del ciclo de protesta de 2017, nuevos actores sociales aparecieron, algunos de los cuales han perdurado hasta ahora, proporcionando nuevas formas de organización, articulación y marcos de acción colectiva. En el informe anterior nos referimos a Labociudadano, Las Piloneras, Creemos Alianza Ciudadana y el Movimiento Ciudadano Dale Letra.

Dale Letra ha tenido el propósito de recuperar la palabra como instrumento de lucha. Hace uso de un alfabeto móvil –letras grandes como pancartas portadas por personas, que se combinan para crear palabras– con los cuales expresa en las movilizaciones consignas y demandas. A través de este instrumento verbaliza los contenidos que motivan la movilización, como una manera de visibilizar y canalizar el malestar, drenar la violencia y fortalecer la protesta pacífica.

Dale Letra, conjuntamente con otras organizaciones como Sinergia, una red amplia de organizaciones de desarrollo comunitario, propicia también “espacios de entendimiento” entre diversos actores sociales, con la finalidad de auspiciar intercambios de ideas y creación de lazos de confianza y respeto mutuo. Con este propósito, junto a otras organizaciones ciudadanas y con las Academias Nacionales y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, impulsó el *Diálogo Social*, un mecanismo de diálogo inter asociaciones, cuya primera jornada pública tuvo lugar en septiembre de 2018. Los ponentes a este encuentro señalaron como metas: acabar con la desesperanza, lograr un acercamiento y entendimiento entre las diferentes posturas, y sobre todo demandar a los actores políticos un diálogo abierto y plural que facilitara una respuesta pacífica al conflicto venezolano<sup>33</sup>. En declaraciones de una de sus activistas promotoras, la arquitecta Mariela Ramírez, existían ya muchas iniciativas que daban apoyo a la ciudadanía, pero estaban aún aisladas unas de otras: “Se deben sumar esfuerzos alejados de todo radicalismo, con una mayor organización y articulación de todas esas iniciativas en base a

31. <https://www.oceinfo.org.co/difusion/noticias/172-enfermeras-venezolanas-en-la-huelga-mas-larga-de-su-historia> descargado el 1-04-2021.

32. Federación de Trabajadores de la Salud y el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Salud, Asistencia y Desarrollo Social.

33. <https://cepaz.org/noticias/dialogo-social-venezuela-requiere-la-suma-de-voluntades-para-crear-espacios-de-entendimiento/> descargado el 01-04-2021.

consensos mínimos”<sup>34</sup>. En las segundas jornadas públicas celebradas en octubre de 2018, asistieron también políticos, jerarcas de la iglesia católica y personalidades<sup>35</sup>. El Diálogo Social ha venido creciendo y funciona como un instrumento de articulación y relación permanente entre diversos actores de la sociedad civil. Se reúnen semanalmente por las redes, se informan y apoyan en sus diversos esfuerzos y elaboran comunicados que son firmados por quienes comparten los contenidos. En diciembre de 2020 el Diálogo Social y Fedecámaras propiciaron un I Foro Cívico Multiactores, con el propósito de estimular una reflexión sobre cuál debería ser la ruta crítica de los sectores sociales en los próximos meses<sup>36</sup>. Actualmente hacen vida en él unas 200 organizaciones (Ramírez, 2021).

A diferencia del FAVL, el Diálogo Social no incluye a partidos políticos, considerando que en el pasado la sociedad civil fue cooptada por estos actores: “La sociedad civil ha actuado históricamente en función de las plataformas políticas, por lo que, cuando estas se caen o pierden credibilidad, la ciudadanía se desactiva y deja de participar en los procesos sociales. La sociedad debe empoderarse y tomar espacios para el encuentro de forma autónoma<sup>37</sup>.” Esta posición no impide que se comuniquen frecuentemente con partidos para escucharlos y hacerles propuestas. Lo que sí despierta el Diálogo Social es desconfianza en los partidos políticos, acostumbrados a relacionarse con la sociedad civil con una dinámica “desde arriba”.

En 2021 grupos de Diálogo Social propiciaron la creación del *Foro Cívico* como un instrumento de aglutinación de actores que tienen coincidencias entre sí y por ello realizan esfuerzos de acción colectiva conjuntas. La coincidencia mayor es en crear las condiciones para un gran Acuerdo Democrático Nacional para superar la crisis que padece la sociedad (Ramírez, 2021)<sup>38</sup>. El Foro Cívico tiene vocería propia y funciona como un actor con un objetivo común y estrategias múltiples. Como parte de sus eventos en 2021 realizó el segundo Foro Cívico Multiactores en febrero.

¿Cuál es su diferencia con el FAVL? El gobierno interino de Guaidó y del G4, como señalamos arriba, han perseguido la salida de Nicolás Maduro del poder principalmente por medio de la confrontación política con el gobierno, exigiendo su renuncia y a través de los tres ejes secuenciales ya descritos arriba. Exigen en las negociaciones donde han asistido un acuerdo integral. El Foro Cívico, en contraste, combate el lenguaje polarizado y se inclina por acuerdos sectoriales, o “éxitos tempranos” en la búsqueda de soluciones parciales, como parte de una estrategia común de democratización institucional (Picón, 2021). No aparece ahí como objetivo el “cese de la usurpación”. Busca, por medio de un enfoque gradual,

34. <https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/10/8192/dale-letra-acciones-pacificas-inciden-en-la-sociedad> descargado el 30-03-2021.

35. <http://efectococuyo.com/politica/organizaciones-sociales-intelectuales-y-politicos-buscan-acuerdo-para-el-cambio-democratico/> descargado el 15-02-2021.

36. Fedecámaras-Sociedad Civil, I Foro Multiactores, realizado el 08-12-2020 (notas mías).

37. Mariela Ramírez, vocera del Diálogo Social en: <https://elpitazo.net/entrevistas/mariela-ramirez-el-acuerdo-nacional-comienza-con-un-dialogo-social-impulsado-por-ciudadanos/> descargado el 08-02-2021.

38. En febrero presentaron un documento de principios y valores: “Es tiempo de entendernos” en [https://cepaz.org/documentos\\_informes/es-tiempo-de-entendernos/](https://cepaz.org/documentos_informes/es-tiempo-de-entendernos/) descargado el 30-03-2021.

acumular fuerza social y aliviar las vulnerabilidades de la población como forma para preparar las condiciones para una negociación exitosa. Así, han activado mesas de trabajo con el gobierno en distintas materias para alcanzar acuerdos. Están entre otras, la dirigida a alcanzar un plan nacional de vacunación contra la Covid-19, otra para reactivar el aparato productivo, la que busca crear condiciones electorales que estimulen la participación, o la que tiene como objetivo buscar acuerdos para garantizar la integridad del territorio. También apoyaron en julio de 2020 la creación de un Foro Interreligioso Social donde participan representantes de las comunidades católicas, evangélicas, anglicanas y judías<sup>39</sup>.

Diálogo Social y Foro Cívico insisten en que, ni su rol, ni sus aspiraciones son reemplazar a los partidos políticos: “Nuestra visión es que [para una negociación] debe ser rediseñado su arquitectura para que no solo estén ahí los actores del conflicto, sino también estemos los sectores sociales. Como decía Pedro Nikken: no estamos pidiendo una silla en la mesa de negociación, pero si estamos pidiendo ser una pata fuerte para sostenerla. Los ciudadanos, que somos los dolientes de este proceso de catástrofe social y económica que vive el país, debemos estar presente y ser escuchados en estos espacios de negociación.”<sup>40</sup>

Como parte de la visión y estrategia sectorial y gradual propugnada por las organizaciones articuladas en el Diálogo Social y el Foro Cívico, en marzo de 2021 fueron postulados quince candidatos a rectores para el nuevo Consejo Nacional Electoral. Estos candidatos cumplían con todos los requisitos que exige la ley: independencia, profesionalismo, honestidad y experiencia en materia electoral<sup>41</sup>. Luego de arduas conversaciones con el oficialismo se alcanzaron acuerdos que permitieron la elección en la plenaria de la AN oficialista de un rector principal y tres suplentes postulados por estas organizaciones. Un primer y discreto paso de un largo camino para recuperar el derecho al voto en condiciones de libertad.

39. <https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-04/venezuela-consejo-interreligioso-social-crisis.html> y <https://www.elimpulso.com/2020/07/26/foro-interreligioso-social-de-venezuela-urge-autorizar-el-acceso-del-programa-mundial-de-alimentos-a-venezuela-26jul/> descargados el 5-04-2021.

40. <https://elpitazo.net/entrevistas/mariela-ramirez-el-acuerdo-nacional-comienza-con-un-dialogo-social-impulsado-por-ciudadanos/> descargado el 5-04-2021.

41. <https://cepaz.org/noticias/foro-civico-postula-candidatos-a-rectores-del-cne/> descargado el 6-05.2021.

### **3. Protesta y sociedad civil en la coyuntura actual: sanciones y necesidades**

Esta revisión de la dimensión organizativa de la sociedad, si bien es general e incompleta, deja ver un cuadro de atomización y fragilidad, aunque también de incipientes sinergias y avances. Esto, si lo complementamos con la situación debilitada y fragmentada de los partidos políticos, nos sitúa en un contexto actual poco favorable para un retorno en lo inmediato a una provechosa salida negociada integral entre gobierno y actores políticos democráticos.

Siendo esto una de las conclusiones de este informe, en lo que sigue presentamos algunas ideas sobre las necesidades que en los próximos meses tienen ante sí los ciudadanos y las asociaciones civiles en Venezuela para robustecer las condiciones que permitan una salida democrática negociada con carácter integral. Partimos de la premisa que los esfuerzos de lo asociativo social, deben orientarse a garantizar una base amplia y firme para sustentar los esfuerzos de los partidos políticos en la búsqueda de este objetivo. Ello es posible, fortaleciendo las organizaciones, estableciendo vasos comunicantes entre ellas y buscando articulaciones formales con los actores políticos para un trabajo dirigido por metas comunes, respetándose estrategias y tácticas plurales, y diferenciadas.

Las acciones colectivas en la calle, protagonizadas principalmente por sectores populares en condiciones altamente precarizadas, están, por lo pronto, huérfanos de representación y desconectados de la esfera política. Estas acciones no cesan, pero no existen actores que las canalicen políticamente. Se abrirán las compuertas para una nueva dinámica de la movilización política ciudadana sólo cuando se establezcan el objetivo y las estrategias comunes entre lo político y lo social, un liderazgo legítimo, políticas comunicacionales y organizaciones abocadas a incentivar formas de protesta pacíficas y creativas, ligadas a mecanismos y plataformas de aglutinación de organizaciones de diverso tipo.

Las organizaciones civiles no han dejado de trabajar. En este informe no mencionamos, como en el informe anterior, organizaciones abocadas a la ayuda humanitaria, a los migrantes, retornados y desplazados, a los presos, a los que padecen flagelos como la Covid-19, los que monitorean enfermedades crónicas o la situación de los adultos mayores, niños y adolescentes, los que resguardan el derecho a la información y libertad de expresión y a todos los que el Estado ha dejado de asistir. Sin embargo, estas organizaciones, con la ayuda de las instancias, agencias y países democráticos de la comunidad internacional, son las fuentes principales de alivio a una población que ya lleva más de cinco años sometida a una emergencia humanitaria compleja y a un régimen autoritario longevo.

En este contexto, las sanciones impuestas en años recientes por países de la comunidad democrática internacional han significado para estas organizaciones un escollo más, sobre todo para las ONG de DDHH y emprendimientos comuni-

tarios, altamente dependientes de financiamiento internacional para subsistir. Según algunos activistas, las sanciones añaden dificultades para el acceso flexible y rápido a los recursos que provienen de instancias internacionales ya que el sistema bancario internacional, donde depositan estos recursos, suele ser particularmente vigilante de ingresos que se depositan en cuentas de venezolanos y bajo cualquier pretexto las inmovilizan o cancelan, poniéndolos en apuros para encontrar alternativas (Correa, 2021).

La sociedad civil se enfrenta a un cúmulo de necesidades. Señalemos algunas principales.

### 3.1 Formación de capacidades

Hay necesidad de apoyar con asesorías, talleres, charlas y recursos a estas organizaciones y sus miembros para la consolidación en ellas de una cultura democrática, liberal y participativa. Ello incluye capacitarlos en legislación nacional e internacional en DDHH, en técnicas de la protesta no violenta y en lecciones aprendidas en otros países de cómo trabajar en sociedades altamente conflictuadas. También incluye incentivar la revisión y evaluación constante de sus estructuras y el desempeño de sus activistas, para ajustarlos a escenarios cada vez más hostiles a sus actividades. No debe descuidarse la formación de relevo pues el costo físico y psicológico para los activistas es alto. El apoyo y la experiencia de instancias internacionales en esta materia es crucial.

### 3.2 Crear más espacios de encuentro y articulaciones en torno a la agenda de los pobres

*Focus groups* realizados en varias regiones del país por Consultores 21, con activistas de ONG unos y con miembros de comunidades populares otros, cuyos resultados fueron presentados en el II Foro Cívico Multiactores de febrero 2021, mostraron información valiosa sobre temas clave para impulsar la apertura de espacios de encuentro y diálogo entre actores sociales y ciudadanos. Para ambos grupos participantes, sus principales urgencias se refirieron a los servicios públicos colapsados y a sus devastadas economías familiares. El tema de la migración surgió permanentemente como un “duelo” que llevan las familias, pero que al mismo tiempo les ayuda a sobrevivir<sup>42</sup>. La desesperanza apareció entre la gente de las comunidades, quienes no ven posibilidades, ni en la dirigencia opositora ni en el gobierno, de resolver sus problemas. Se constató además una extrema desconfianza en los partidos políticos. Intervenir en estos temas a través de actividades de diversa naturaleza, puede reconducir comportamientos ciudadanos hacia la recuperación de esperanza, autoestima y solidaridad social. El diálogo y dinámicas de articulación permiten recuperar confianza y autoestima, lo que

42. <https://elpitazo.net/politica/foro-civico-organizaciones-y-movimientos-sociales-plantan-este-5feb-soluciones-a-la-crisis/> descargado el 1-04-2021 y notas recogidas por mí.

estimula la participación y movilización ciudadana. La comunidad internacional aquí también puede jugar un rol positivo creando incentivos para estas dinámicas.

### **3.3 Acuerdos entre partidos y sociedad civil**

Estos acuerdos son para garantizar el respeto a la autonomía de cada quien, la tolerancia a sus diferencias, el irrestricto apego a las libertades y la igualdad, en el marco de la construcción de una transición a la democracia y restablecimiento de un Estado de Derecho. Compromisos políticos donde actores reconozcan que están juntos en esta empresa común, y que se consultarán para las reformas legales imprescindibles que expresen la construcción de una sociedad organizada y autónoma, con una dinámica que va de abajo hacia arriba con múltiples conexiones institucionales de consulta y toma de decisiones. Asociaciones gremiales y sindicales, ONG de DDHH y organizaciones empresariales, entre otras, debieran estar abocadas a la identificación de las prioridades en reformas legales e institucionales que permitan la democratización del Estado en lo que prosperen acuerdos y/o se inicie una transición.

## **4. La sociedad civil: apoyo imprescindible para los partidos en una negociación**

En este ensayo hemos puesto de relieve la central importancia de una sociedad civil densa, numerosa y autónoma como garantía para un proceso de democratización por la vía de una negociación entre actores. En sus discursos también ha quedado claro que algunos de ellos desean participar presencialmente en esos acuerdos. Es el caso del sector empresarial organizado en Fedecámaras. Sin embargo, ninguno se arrogó un derecho exclusivo de hacerlo, e incluso la mayoría reunida en el Diálogo Social hizo claro que su participación no es como protagonistas en una mesa de negociación, sino como “una pata sólida de esa mesa”.

Dadas las precariedades en que parecen estar sumidas los partidos políticos actuales, las organizaciones de la sociedad civil les tocará seguramente jugar un rol más activo a futuro en estrategias de acuerdos negociados. Primero, para recrear condiciones internas en el país que permitan abrir de nuevo un proceso de conversaciones y acuerdos con la dictadura. La sociedad civil, a diferencia de los partidos, está toda trabajando en el territorio. Sin embargo, dista aún mucho de atender y/o expresar las necesidades de todos los estratos venezolanos, y su extensión es restringida con relación al espacio geo humano. Su fragmentación, sólo aliviada por iniciativas muy recientes de articulación, agregación y construcción de discursos despolarizados, necesita ser atendida para superarse.

Aun así, en el corto y mediano plazo, por su experiencia de trabajo, pareciera estar capacitada y más sincronizada que los actuales partidos, con las prioridades del ciudadano. Mejor preparada profesionalmente para identificar y desarrollar procesos de elaboración de agendas urgentes y de mediano plazo, para respaldar las oportunidades para que ocurran procesos de negociación. De hecho, distintas ONG y organizaciones están o tienen preparados informes técnicos en diversos campos que servirán para apalancar entre otros, la recuperación de la ruta electoral, la reactivación económica y de la industria petrolera, y la reinstitucionalización de las ramas del poder público. Estas dimensiones de la crisis son tan complicadas y onerosas que necesitarán esfuerzos mancomunados y recursos financieros internacionales para desarrollarlos.

Las sinergias entre lo político y lo social son una condición imprescindible para superar positivamente el desafío que las fuerzas democráticas tienen enfrente. Las organizaciones de la sociedad civil, en su rol de intermediarias entre organizaciones de base y ciudadanos comunes con la esfera política, si son escuchadas, abrirán las compuertas para que fluya la fuerza creativa de

la sociedad. Ellas pueden contribuir en la definición del objetivo compartido, y a establecer propuestas de prioridades, estrategias y tácticas. Su colaboración será valiosa también en la construcción de una narrativa nacional común e incluyente, que dibuje los rasgos de un futuro compartido. La sinergia entre partidos y sociedad civil también creará las condiciones para la reaparición de la movilización de calle. Deberán estar listas para respaldar las negociaciones, asesorar tácticas y monitorear los cumplimientos.

Un proceso de negociación en un contexto como el venezolano es de una altísima complejidad. Ninguna experiencia de otro país puede ser calcada, pero muchas deben estudiarse para sacar de ellas lecciones útiles. El desafío más inmediato que tienen las fuerzas políticas y sociales de Venezuela es resolver sus problemas de representación y legitimidad, y acercarse entre ellas, deponiendo rigideces, rencores, sectarismos y mezquindades. Como otras sociedades muestran, la experiencia tunecina, por ejemplo, si reconocen sus debilidades y fortalezas, dialogan de buena fe, verán que ambas son imprescindibles para alcanzar la transición. Acercarse, escucharse, respetarse y articularse para la superación de la crisis venezolana es lo que todos esperamos de ellos.

## Referencias

- Briceño León, Roberto (2021): Director de LACSO. Consulta realizada por WhatsApp el 18-03.
- Correa, Carlos (2021). Director de la ONG Espacio Público. Consulta realizada por WhatsApp el 26-03.
- Datincorp (2021): “Revelaciones del estudio Fedecámaras-Datincorp”, enviado a mi WhatsApp por el director de Datincorp, Jesús Seguías el 13-03.
- Delphos (2020): Análisis del director de Delphos Félix Sejas sobre evolución de mediciones de opinión pública hasta enero de 2021. En el Foro *Acuerdos Parciales* (IFIT). Caracas, 03-02 (Notas mías).
- Foro Penal (2020): *Reporte anual sobre represión en Venezuela 2019*. En: <https://foro-penal.com/wp-content/uploads/2020/01/REPORTE-ANUAL-2019-DEF-V3.pdf> consultado el 18-03-2021.
- Fedecámaras (2020a): 76 Asamblea Anual en: <https://www.fedecamaras.org.ve/tag/76-asamblea/>, descargado el 1-04-2021.
- Fedecámaras (2020b): “Intervención de Ricardo Cusanno en el I Foro Cívico Multiactores” (Diálogo Social-Fedecámaras), 08-12 (Notas mías).
- IFIT (2020): *Elementos para una Transición Integral en Venezuela. Visión desde lo local* en <https://ifit-transitions.org/publications/building-an-inclusive-transition-in-venezuela-a-local-perspective/> descargado el 7-11-2020.
- Iranzo, Consuelo (2018): “La triste historia del sindicalismo venezolano en tiempos de revolución”, *Nueva Sociedad*, N° 274, marzo-abril, pp. 107-119.
- LACSO (2019): *Mapeo de actores de la sociedad civil en Venezuela. Informe Final. Caracas, marzo*.
- López Maya, Margarita (2020): “Pandemia y control totalitario” en Salvador Martí i Puig y Manual Alcántara Sáez (eds.). *Política y crisis en América Latina. Impacto de la Covid-19*. Barcelona, Catedra de Cultura Jurídica-Marcial Pons, pp. 347 a 364.
- Lorenzo, Jaime (2021): Representante de Médicos Unidos de Venezuela. Consulta por WhatsApp el 28-03.
- OACDH (2009): Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S> descargado el 11-03-2021.
- OVCS (2020): <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-en-2019>. Consultado el 15-03-2021.
- OVCS (2021): <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/destacado/informe-anual-situacion-de-la-conflictividad-en-venezuela-en-2020>. Consultado el 15-03-2021.
- Picón, Roberto (2021): *Foro How Venezuelan Civil Society is Pushing for Free and Fair Elections*. Washington DC, 16-03 en [https://www.youtube.com/watch?v=PetNyF8NB\\_o](https://www.youtube.com/watch?v=PetNyF8NB_o), descargado el 16-03.
- Ramírez, Mariela (2021): Activista fundadora de Dale Letra y vocera del Diálogo Social. Consulta realizada por WhatsApp el 01-04.
- Stephany, Keta (2021): Dirigente de la FAPUV. Consulta realizada el 23-03 por WhatsApp.
- Valiñas, Marta (2021): “Declaración de Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos”. En: <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26872&LangID=S> bajado el 17-03-2021.